

Palabras de Alicia Bárcena,
Secretaria Ejecutiva de la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
con ocasión de la inauguración del Foro Económico América Latina y el Caribe-
Unión Europea 2013
CEPAL, 21 de enero de 2013
Santiago de Chile

Bienvenidos a la CEPAL a la inauguración del Foro Económico 2013 Unión Europea-América Latina y el Caribe.

Saludo con especial afecto a François Bourguignon, Director, Paris School of Economics y al Embajador Jorge Valdez, Director Ejecutivo de la Fundación Unión Europea, América Latina y el Caribe.

Nuestro agradecimiento a los colegas de la cooperación regional francesa en América del Sur, Sr. Pascal Martínez.

Igualmente reconocemos a los colegas de la cooperación alemana, en particular a Jürgen Klenk, Frank Kramer y Sina Johannes.

Es para mí un honor inaugurar, junto a François Bourguignon, este valioso espacio de diálogo e intercambio de ideas entre expertos de las dos regiones.

A ustedes, distinguidos panelistas, mi agradecimiento por acudir a esta convocatoria conjunta para debatir los desafíos y oportunidades de la relación entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

Los Jefes de Estado y de Gobierno de 60 países se darán cita en Santiago junto con académicos, empresarios, parlamentarios y representantes de la sociedad civil. Su responsabilidad es enorme, pues representan a 1.000 millones de personas que hoy ven con preocupación su presente y, sobre todo, su futuro.

Las expectativas sobre la Cumbre son mixtas. Hay más interrogantes que propuestas concretas. Pero para nadie pasa desapercibida la importancia de la actual coyuntura para el futuro de las relaciones birregionales. Quizás sea una oportunidad para encontrar mayores complementariedades venciendo viejas asimetrías históricas, comerciales y sociales; de avanzar hacia una relación más equilibrada y equitativa.

Hoy hay cierta perplejidad en esta región, pues hasta hace poco la Unión Europea se percibía como una región que brindaba un norte respecto del desarrollo y la cooperación. Una región comprometida con la integración económica, con la protección social de vocación universalista, con la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible y con el multilateralismo. Todo ello orientado hacia la construcción de un estado de bienestar, igualitario y productivo.

Pero tras la crisis que comenzó en 2008, muchos de estos objetivos están cambiando e incluso hay quienes culpan precisamente al estado de bienestar de los problemas que vive la zona del euro y se han olvidado de las causas centrales vinculadas más con la desregulación financiera y la voracidad de los mercados especulativos.

La Unión Europea continúa siendo el principal cooperante, el mayor inversionista directo y el segundo socio comercial de América Latina y el Caribe. La presencia europea ha sido clave en diversas etapas de la historia de nuestro continente. Fue a partir de las décadas de 1970 y 1980 que las políticas y los patrones de desarrollo económico y social de ambas regiones comenzaron a buscar más complementariedades.

Por un lado, América Latina procuraba acelerar su inserción internacional utilizando la inversión extranjera directa (IED) como fuente de financiamiento e instrumento para la modernización productiva. Por otro, Europa avanzaba en reformas orientadas a la creación de una unión económica profunda, lo que acentuaba la presión para aumentar el tamaño de sus empresas y competir más eficientemente en los mercados comunitarios y mundiales.

La Unión Europea se transformó en la principal fuente de IED para América Latina y el Caribe, y esta se convirtió en el principal destino de las inversiones europeas dirigidas a economías emergentes. Mayor inversión productiva y mayor transferencia tecnológica y de políticas laborales con creación de empleo fueron las características de más de una década de inversiones europeas.

En el período reciente, se produjo un fuerte estancamiento en la relación. La demanda europea perdió fuerza; el reposicionamiento de China, la incorporación de nuevos Estados miembros a la Unión Europea, la creciente relevancia del Oriente Medio y África Septentrional en la agenda exterior europea, y la aguda crisis financiera que ha golpeado a esa región fueron factores que influyeron.

Pero para varias empresas europeas el mercado latinoamericano ha sido una importante fuente de ingresos, en especial durante períodos en los que sus mercados locales crecen lentamente.

En Europa, los riesgos de una desigualdad creciente se elevan a la luz de la crisis y los altos niveles de desempleo que se viven en diversos países (cerca al 26% en Grecia y España, por ejemplo). Las demandas de austeridad fiscal pueden comprometer logros sociales construidos a lo largo de muchos años.

La manera como la zona del euro está enfrentando la crisis ha repercutido de manera negativa en el dinamismo de la demanda mundial.

La baja en la demanda se ha traducido en una disminución de las exportaciones de América Latina y el Caribe hacia Europa del 5% en 2012. Los desequilibrios financieros, fiscales y de competitividad de la zona del euro en 2012 resultaron en: i) recesión en la mayor parte de los países de Europa, con un crecimiento económico negativo del 0,5% en 2012; lenta resolución conjunta de problemas, aunque con la decisión del Banco Central Europeo de intervenir en ciertas

condiciones; inestabilidad financiera, aunque con mejores primas de riesgo en la zona del euro durante el segundo semestre.

En la Unión Europea persisten problemas de solvencia de deuda pública y del sistema financiero, y esa región registrará escaso crecimiento y una posible recesión en 2013.

Los necesarios cambios institucionales comunitarios (unión fiscal y supervisión bancaria única) tomarán tiempo y exigen una concertación política de gran visión.

Por fortuna, los efectos de la crisis en la esfera financiera, aun teniendo en cuenta la fuerte presencia de la banca europea en América Latina y el Caribe, han sido, por el momento, más acotados, si bien los flujos de capital financiero dirigidos hacia esta región se han moderado.

A esto se suma que nuestros sistemas financieros están sanos, ya que los niveles de capitalización son elevados en la región (por encima del requerido por el Acuerdo de Capital Basilea), la calidad del capital ha mejorado y la morosidad es baja. Esto no implica que América Latina y el Caribe sea inmune a los efectos de corto y largo plazo de un contagio en caso de agravarse la situación financiera europea.

¿Dónde está la región hoy?

Formatted: Spanish (Spain-Traditional Sort)

Un estado de ánimo positivo recorre actualmente a América Latina y el Caribe, pese a las turbulencias de la economía mundial.

Sin dudas, estamos aprendiendo del pasado y ensayando nuevos caminos.

Este año se cumplen 30 años de la dramática crisis de la deuda, que desencadenó para nuestro continente la “década perdida” de los años ochenta. El largo trayecto que debimos recorrer desde entonces conllevó un rico aprendizaje que nos permite actualmente enfrentar una grave recesión mundial con mayor capacidad de resiliencia económica y social.

Hemos aprendido a ser prudentes en lo macroeconómico y progresistas en lo social, aplicando medidas anticíclicas diversas, desde moderadas y transitorias hasta estructurales, que evitaron, sobre todo en la última década, costos sociales irreversibles.

Cabe destacar que la economía de nuestra región tendrá en 2012 y 2013 un crecimiento superior al promedio global (3,1 % y 3,8%, respectivamente) aun con la desaceleración de 2011 y 2012. Continúan siendo activos importantes una inflación controlada, sólidas políticas fiscales, una deuda pública menor y mejor estructurada (por debajo del 35% del PIB) y un nivel inédito de reservas internacionales (cerca de 800.000 millones de dólares).

Además, en las últimas dos décadas, gracias a la acción decidida de sus Estados, esta región ha visto disminuir el número de personas que vivían en la pobreza, de

un 48,4% (1990) a un 28,8% (2012). La extrema pobreza o indigencia disminuyó más de 11 puntos porcentuales, pasando del 22,6% al 11,4% de la población en el mismo período. El empleo aumentó en cantidad y mejoró en calidad. Hoy el desempleo es inferior al que teníamos antes de la crisis (6,4%).

Sin embargo, sin afectar ese estado de ánimo positivo, la actual coyuntura también nos invita a mantener cierto grado de cautela, aunque siempre con la convicción de que nuestra región está mejor preparada para darle continuidad a los aciertos y romper con las viejas estructuras que nos amarran a un pasado de agudas paradojas.

Seguimos siendo la región más desigual del mundo, lo cual nos indica que **no solo en lo social se juega lo social**. Las políticas sociales no bastan para abatir definitivamente la pobreza y cerrar las enormes diferencias que persisten entre los sectores más ricos y los más pobres de la sociedad.

Aún 167 millones de personas viven en la pobreza, de los cuales 66 millones son indigentes. Además, una proporción significativa vive en los linderos de la línea de la pobreza y es vulnerable a recaer, sea por choques externos, por catástrofes familiares o pérdida de fuentes de ingreso primario. Existen además profundas desigualdades entre el decil más rico y el más pobre.

Tenemos herencias dentro de la región que perpetúan desigualdades y mecanismos de exclusión. Persiste la rigidez de las brechas productivas y aún hay poca movilidad social (especialmente entre las mujeres de los grupos

socioeconómicos de menores ingresos). Si bien la fecundidad está descendiendo, la mayor parte de la reproducción de la sociedad tiene lugar en hogares pobres, concentrándose sobre todo en mujeres jóvenes de sectores de mayor vulnerabilidad social, lo que perpetúa intergeneracionalmente la desigualdad y la exclusión.

Estas desigualdades de ingreso, de productividad, de género y de derechos fundamentales conspiran contra el desarrollo, la seguridad y la democracia.

Por ello la CEPAL propone hoy el cambio estructural para la igualdad. Situar la igualdad en el centro implica una ruptura con el paradigma económico que ha prevalecido en las últimas tres décadas. Este cambio guarda sincronía con una acumulación de demandas postergadas de la ciudadanía que han llevado a recomponer el mapa político y poner énfasis en las políticas centradas en derechos, con una vocación más universalista.

Hablar de igualdad implica difundir a lo ancho de la estructura productiva y el tejido social el desarrollo de capacidades, el progreso técnico, plenas oportunidades laborales y el acceso universal a la protección social. El empleo con derechos es la llave maestra para superar la desigualdad y cerrar brechas con una mirada transversal en cuanto a equidad de género, étnica y racial.

En la región, más de la mitad del empleo se concentra en las pymes y en las microempresas formales e informales y es de muy baja productividad. Los sectores de menor productividad producen el 10,6% del PIB pero representan el

50,2% del empleo. En términos relativos, la región requiere generar muchos más empleos de calidad.

Por ello la CEPAL ha formulado una propuesta y una apuesta que se basan en el cambio estructural para la igualdad. Esto implica llevar a cabo transformaciones cualitativas en la estructura productiva de los países de la región, con el fin de fortalecer sectores intensivos en conocimiento y de rápido crecimiento de la demanda interna y externa, para así generar ganancias en productividad con más y mejores empleos.

Proponemos una estrategia para que la región salga de las estructuras productivas centradas en ventajas comparativas estáticas y avance hacia ventajas comparativas dinámicas con mayor intensidad de conocimientos y con progreso técnico.

El crecimiento de la región se asocia a un *boom* exportador de productos básicos y a una mejora de los términos de intercambio. Esto se ha traducido en una reprimarización de la malla productiva, con mayor dependencia en las ventajas comparativas estáticas. En 2010, los productos básicos representaron aproximadamente el 40% de las exportaciones totales, mientras que en el período 2001-2002 alcanzaban solo el 27,6%.

Sin desconocer la importancia de contar con una importante dotación de recursos naturales, es claro que son las ventajas dinámicas las que sostienen el crecimiento en el largo plazo, y estas dependen de la innovación y el conocimiento. Una tarea

pendiente de la región es buscar el modo de aprovechar la oportunidad que da esta bonanza y reinvertir estas ganancias extraordinarias de productividad para dar un salto hacia el desarrollo.

La CEPAL insiste en la necesidad del cambio estructural para generar trayectorias de aprendizaje, mayor diversificación y presencia en los mercados de más rápido crecimiento.

Hemos analizado cómo lograron dar el salto las economías emergentes asiáticas a partir de un creciente peso de los sectores intensivos en tecnología en la producción y en las exportaciones.

Los países que redefinieron el sistema internacional de comercio y la división internacional del trabajo en las últimas décadas, como China y otros países de Asia, lo hicieron por el camino del cambio estructural. Lo hicieron apoyados en políticas industriales y tecnológicas activas, elevando el contenido de conocimientos en la producción y las exportaciones, promoviendo la industrialización y un nuevo tipo de inserción global.

Entre 1985 y 2011, los países en desarrollo de Asia Oriental (Filipinas, Indonesia, Malasia, República de Corea, Singapur y Tailandia) aumentaron el porcentaje de las exportaciones de alta tecnología en el total de sus exportaciones del 15% al 40%, elevando su participación en el comercio mundial del 7% al 12%. En tanto, los países de América Latina solo aumentaron la participación de los bienes de

alta tecnología del 5% al 12%, y su participación en el comercio mundial solo marginalmente logró superar el valor de 1985, equivalente al 6%.

En el largo plazo, el cambio estructural es la base para lograr empleos de calidad y mayor igualdad. Por ello, la región debe difundir internamente el progreso técnico y de ese modo diversificar la estructura productiva para crear más empleos de calidad.

Los empleos que se generan en la región todavía pertenecen a actividades de menor productividad, lo que compromete el crecimiento de esta variable en el conjunto de la economía. Se trata de otro casillero vacío, el de la ausencia de experiencias duraderas de aumento conjunto de la productividad y el empleo en el tiempo.

En el corto plazo, las políticas sociales son fundamentales, y sirven para dos objetivos. Por un lado, permiten aumentar la igualdad durante la transición hacia una estructura con mejores empleos, ya que procuran una mejoría en las habilidades y capacidades de los trabajadores para asimilar el progreso técnico. Por otro lado, promueven el acceso universal a la salud y la educación estimulando también los niveles de productividad de la economía; sostienen la demanda interna con sus efectos positivos sobre la producción y la inversión, y generan niveles de cohesión social indispensables para dar sustento político a un proceso de transformación amplia de la base productiva.

Creemos que el crecimiento virtuoso es el resultado de un proceso de inclusión y universalización, no el subproducto espontáneo de reducir derechos, especialmente laborales, y someter a una población largamente marginada a mayores privaciones.

El objetivo es formalizar e incorporar a la población excluida al mercado de trabajo con derechos, y ampliar el estado de bienestar por medio del acceso universal a la educación y la salud. La construcción del estado de bienestar ha sido muy incipiente en la región. Hay un largo camino por recorrer en ese sentido; este camino es complementario, y no opuesto al del aumento de la productividad y el dinamismo económico.

La estructura productiva no solo debe ser más intensiva en conocimientos e innovación, sino que debe responder a los objetivos de sostenibilidad social y ambiental. Tanto como la intensidad del progreso técnico, interesa su dirección, sus contenidos, las trayectorias de sostenibilidad que se abren hacia el futuro.

Por otra parte, como se analizará en el primer panel, nuestros estudios muestran que durante el ciclo económico, los auges en la región son más cortos y menos intensos que en otras partes del mundo. En el este de Asia y el Pacífico, el PIB crece un 39% en promedio durante la fase de expansión del ciclo, que dura casi 33 trimestres (ocho años). En cambio, en el caso de América Latina y el Caribe, la expansión del PIB es de solo un 26% y su duración, de 14 trimestres.

Este patrón se confirma y refuerza con el comportamiento de la productividad. En el caso de Asia y el Pacífico, la productividad laboral aumenta un 23% en la fase expansiva del ciclo, mientras que en América Latina y el Caribe lo hace solo un 13%. La inversión registra un comportamiento similar, y además la caída de la inversión pública en la fase contractiva del ciclo tiende a sobrepasar el incremento experimentado en la recuperación.

Ya es evidente que la inversión es una de las principales variables que comprometen el cambio estructural y el progreso técnico. Es el puente entre el largo plazo y el corto plazo, que es dado por la inversión. Las políticas de estabilización que reducen la inversión pública en el corto plazo para contener el déficit fiscal, o que permiten la valorización del cambio para evitar la inflación, tienen efectos sobre la competitividad y la estructura productiva que van mucho más allá del corto plazo. No debe olvidarse este horizonte temporal más largo al formular la política macroeconómica.

Para avanzar en el cambio estructural, no cabe duda que las economías de la región deben redoblar su prudencia macroeconómica, fortalecer su gestión, procurar la sostenibilidad de las cuentas fiscales y externas, y reforzar las medidas macroprudenciales relativas a los flujos financieros y a la evolución del crédito. Pero también deben basar sus decisiones de política en el comportamiento a largo plazo de las variables económicas y apostar a una macroeconomía para el desarrollo que vaya más allá de la estabilidad nominal.

Cuando hablamos de cambio estructural, hablamos de políticas industriales que permitan diversificar la economía hacia sectores con mayor valor agregado. Se trata de generar encadenamientos productivos y con ello distribuir mejor las ganancias de productividad. Hablamos de un Estado proactivo para estimular sinergias entre las políticas macroeconómicas y las políticas industriales y sociales. Se trata de apoyar eficazmente a las pequeñas y medianas empresas, de dar el salto en materia de investigación y desarrollo, de aprovechar las nuevas tecnologías para producir de forma limpia. Se trata de fortalecer la educación y la capacitación.

La clave está en coordinar las políticas macroeconómicas de corto plazo con las políticas industriales de largo plazo y las políticas sociales redistributivas.

Además, en esta senda de desarrollo, la sostenibilidad ambiental no puede considerarse un tema de segundo orden; asimismo, se debe apuntar hacia una solidaridad intergeneracional.

América Latina y el Caribe necesita un cambio estructural con sostenibilidad ambiental que solo será posible si se logra un salto científico y tecnológico profundo y amplio. Es necesario redefinir la llamada economía de la oferta (*supply side economics*) a partir de una visión que considere el impacto de la estructura productiva sobre los niveles de emisión y sobre otras variables de sostenibilidad ambiental, así como la inclusión al sistema productivo y de consumo de sectores que se han beneficiado solo marginalmente del crecimiento.

El desafío del cambio climático, cuyos efectos negativos se hacen cada día más visibles, también trae demandas urgentes. Poco se ha avanzado más allá de las declaraciones.

Hay un amplio espacio para que Europa y América Latina y el Caribe perfeccionen la cooperación, no solo en las inversiones y en la transferencia de tecnologías verdes, sino también en términos de política, para promover una acción global coordinada.

Se trata de poner instrumentos —como las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, los nuevos materiales, la biotecnología y la nanotecnología— al servicio del cambio estructural.

La combinación entre los nuevos paradigmas tecnológicos y un nuevo patrón de crecimiento hacia economías sostenibles e inclusivas puede ser el eje estratégico que oriente las políticas industriales y tecnológicas.

Como lo muestran algunos ejemplos exitosos, una convergencia entre estas tecnologías y los temas ambientales y de inclusión es factible, ya que indican la viabilidad de nuevas trayectorias tecnológicas en tramos del aparato productivo, la organización de las ciudades o la provisión de servicios a sectores de bajos ingresos.

Cabe advertir que el propio cambio estructural, al priorizar sectores y actividades, genera en el corto plazo situaciones de pérdida de empleos. Para disminuir los

costos sociales que este proceso genera, el Estado debe garantizar ingresos a quienes se ven expuestos a pérdidas de puestos de trabajo por la recomposición sectorial.

Al mismo tiempo, las políticas deben promover la capacitación activa de los trabajadores en las habilidades nuevas necesarias para ejercer las actividades más dinámicas. Por lo tanto, la política social debe acompañar la transición hacia una estructura más dinámica al mismo tiempo que contribuir a su construcción en el largo plazo. Por un lado, actúa como un paliativo. Por el otro, fomenta la capacitación y la incorporación de los trabajadores a mercados formales de trabajo moderno, como una inversión necesaria para el cambio estructural.

Además de estas herencias estructurales, está la predominancia de la balanza de pagos, la dependencia de la región del contexto internacional y, por ende, la importancia de lograr una mejor articulación intrarregional como uno de los mecanismos más importantes de resiliencia.

La desaceleración de los países industrializados está afectando a las economías emergentes. Tanto es así que las exportaciones regionales se desaceleraron en gran medida, creciendo solamente un 1,6% en 2012, después de haberse expandido un 23% en 2011. Esto pone en riesgo el modelo de crecimiento exportador, sobre todo en los países que más dependen de estos mercados. Por otra parte, está induciendo a reflexionar más respecto de los cambios geopolíticos y geoeconómicos y a revalorar la importancia de las relaciones intrarregionales.

Además, se está conformando un escenario inédito, dado por el peso cada vez mayor de las economías emergentes.

En conjunto, el crecimiento de la actividad económica de Asia y el Pacífico y América Latina y el Caribe ha representado el 60% del crecimiento económico mundial. Esta tendencia augura que, antes de 2020, las exportaciones Sur-Sur sobrepasarán a las exportaciones Norte-Norte.

Algo parecido acontece con los flujos de IED, de los cuales ya el 50% se dirige a las economías en desarrollo. La estructura de las cadenas de valor también importa. Se trata de propiciar no solamente el intercambio de bienes o productos finales, sino de lograr mayores vínculos productivos a partir de bienes intermedios y servicios. Esto requiere de una modernización de la institucionalidad comercial y de la infraestructura que apoya la facilitación del comercio. Ya está ocurriendo en Europa y en Asia y el Pacífico, y es una tarea pendiente en nuestra región. El comercio intrarregional apenas alcanza un 19%, en tanto que en Europa asciende al 66% y en Asia y el Pacífico está por encima del 40%.

Por otra parte, para 2016, las economías en desarrollo alcanzarán el 53% del PIB mundial, con lo que se empieza a construir una nueva geografía de la economía mundial, que induce a repensar la estructura de las alianzas estratégicas, que otorga mayor importancia a las relaciones Sur-Sur. No cabe duda, pues, que **el Sur ya no es el mismo y América Latina y el Caribe también ha cambiado**. Nuestra región empieza a ser parte de la solución.

Eso también significa asumir nuevos desafíos; por ejemplo, avanzar en posturas regionales unificadas y en articulación con los de otras zonas en desarrollo que permitan abordar desafíos globales de gran envergadura como el cambio climático, que emplaza a nuestra región, como a todo el mundo, e idear estrategias para desarrollar economías con bajo contenido de carbono y con mayor eficiencia en el uso de energía, con capacidad para alcanzar la seguridad alimentaria, la seguridad ciudadana y la seguridad climática.

Creemos que no hay modelos únicos, que se deben tomar en cuenta las especificidades económicas e institucionales de cada país.

En la CEPAL insistimos en la necesidad de formar una nueva ecuación entre el Estado, el mercado y la sociedad, que incluya pactos fiscales y sociales que doten de legitimidad y recursos a este proceso. El papel del Estado es indispensable para articular y generar sinergias entre estas políticas.

Esto requiere de un mejor Estado, se trata de traer a la política de vuelta. El cambio estructural depende de una decisión de orden político que en nuestra región, a diferencia de Asia, se plasma en pactos sociales que respondan a los desafíos de lograr continuidad y ruptura en democracia.

El cambio estructural es el camino, la política el instrumento y la igualdad el objetivo de fondo.

¿Qué inversión europea es bienvenida en América Latina? Ciertamente, aquella que promueve la creación de capacidades y la transformación productiva de la región.

Una asociación más profunda entre América Latina y la Unión Europea permitiría a nuestra región acelerar su crecimiento económico, avanzar en el cambio estructural hacia sectores más intensivos en conocimiento, reducir la pobreza, aumentar la inclusión social y proteger el medio ambiente.

Esto se lograría con la profundización de acuerdos comerciales que abran espacio para las inversiones, particularmente en nuevas actividades intensivas en conocimiento y empleo de calidad; con el estímulo a la creación de pequeñas empresas, generando empleos en redes y cadenas mundiales de valor; con el impulso a la innovación y a la masificación de las nuevas tecnologías, en particular las de la información y las comunicaciones (TIC); el fomento a inversiones en tecnologías de mitigación del cambio climático, contrarrestando las externalidades negativas del crecimiento económico; el aumento del uso de energías inocuas para el medio ambiente, y la diversificación de la matriz energética con fuentes renovables no convencionales, aprovechando el liderazgo de las empresas europeas en este ámbito para avanzar hacia una economía verde.

La Unión Europea también se vería favorecida en dimensiones clave para su bienestar económico y social, con claro impacto sobre la generación de empleos.

Habría, por ejemplo, nuevas oportunidades de negocios para sus empresas en áreas no tradicionales, como las nuevas tecnologías, la economía verde y las redes sociales; se produciría una expansión de sus mercados tradicionales en los sectores de telecomunicaciones, automóviles, farmacéutica, electricidad y banca; una apertura de mercados para sus pequeñas y medianas empresas; se podría aprovechar la internacionalización de las empresas latinoamericanas para revitalizar algunos sectores productivos europeos bajo fuerte competencia mundial.

Finalmente, una última reflexión respecto del papel del Estado en América Latina y el Caribe, que difiere del debate que se lleva a cabo en Europa. Allí, frente a la crisis económica, surgen voces desde el mundo financiero que piden el desmantelamiento del estado de bienestar.

Estas recomendaciones van en sentidos similares a las que castigaron tan duramente a las sociedades latinoamericanas durante la crisis de la deuda, también conocida como “la década perdida” de los años ochenta: la restricción fiscal con énfasis en la reducción del gasto social y la inversión pública.

Nosotros planteamos, en contraste con este paradigma, la importancia de fortalecer el rol del Estado en lo social. Este será el tema del tercer panel de este foro.

Creemos en la CEPAL que hay que invertir en lo social no solo para imprimirle al desarrollo un sesgo más igualitario, sino porque precisamente esta inversión es

más consistente con una economía dinámica, que permita elevar la productividad media de la sociedad mediante capacitación y educación, y a la vez mantenga los necesarios niveles de demanda interna para sostener y expandir la actividad económica.

| Es inherente a la agenda de la igualdad de derechos que toda la ciudadanía cuente con mínimos de bienestar que sean progresivos en el tiempo y en virtud de los efectos positivos del cambio estructural.

| Por lo mismo, el papel del Estado y de la fiscalidad para proveer sistemas más inclusivos e integrados de protección social debe ser cada vez más fuerte, sobre todo en una región donde la mayoría de los países tiene en esta materia una larga cuenta pendiente.

| El Estado es fundamental porque el mercado, librado a sus propios mecanismos de autorregulación, ha exacerbado las brechas de calidad y de logros en lugar de cerrarlas. Por lo mismo, se propone avanzar en la “inflexión de lo social” hacia un papel más activo del Estado en el bienestar, con un incremento sostenido del gasto social, avances en institucionalidad social para mejorar la gestión pública y sistemas de transferencias de ingresos, que surten un claro impacto redistributivo.

| En este sentido, el Estado social está convocado a una función clave de doble perspectiva. Por una parte, acompaña y apoya la transición hacia una estructura más dinámica. Pero por otra parte contribuye a su construcción en el largo plazo.

Reconocer un papel central del Estado para armonizar el cambio estructural con la igualdad significa también que el Estado debe velar por una institucionalidad laboral que favorezca una apropiación más justa de ganancias de productividad entre los distintos actores del mundo productivo; por otra parte, debe promover un sistema de protección social integrado, sobre la base de un gasto social y una tributación progresivos, que permita cubrir los riesgos y vulnerabilidades que se producen en el ámbito del trabajo y de las familias de los trabajadores, por efecto de las dinámicas de transformación propias del cambio estructural.

Finalmente, dados los rezagos y brechas en capacidades humanas, y la falta de articulación entre los requerimientos de la demanda de trabajo y las características de la oferta, el Estado debe asumir cabalmente los retos que le plantea la sociedad del conocimiento en este ámbito: una sociedad más educada, en la que el desarrollo de capacidades pertinentes para el nuevo mundo productivo y comunicacional sea un derecho de todos; y un sistema integrado de formación para el trabajo que incluya componentes de educación técnica y capacitación laboral, y que provea oportunidades de empleo acordes con el cambio estructural planteado.

Sostenemos, en síntesis, que el Estado debe asumir el papel que le corresponde en la conducción de las estrategias de desarrollo de nuestros países, más allá de la subsidiariedad pregonada por el paradigma neoliberal. Para ello debemos ser capaces, a partir de una mirada crítica sobre su desempeño histórico, de perfilar ese papel, dotarlo de las herramientas necesarias y encontrar su lugar preciso y

en equilibrio con el mercado y el ciudadano, así como el balance óptimo de esta trilogía en la dinámica del desarrollo.

Por último, consideramos un avance la creación de nuevas organizaciones durante la última década para promover la integración y la cooperación.

Elas son un paso más hacia el cumplimiento de uno de los sueños más acariciados por la CEPAL: la integración regional. Por ello, la Comisión colabora estrechamente con los nuevos mecanismos regionales, como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América - Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), e intenta reforzar la cooperación con los tradicionales mecanismos de integración regional y subregional tales como la Comunidad del Caribe (CARICOM), la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), entre otros.

Este regionalismo permitirá una ampliación integrada y más eficaz de los vínculos económicos entre Asia y el Pacífico y nuestra región.

Los mecanismos interinstitucionales para analizar prioridades globales en los que la CEPAL ha participado son otra forma de establecer una presencia regional. Por ejemplo, la preparación de informes interinstitucionales sobre el progreso hacia los Objetivos de Desarrollo del Milenio, el liderazgo en el Mecanismo de coordinación regional, así como la organización de reuniones preparatorias para

la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20) o la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo.

Estoy convencida de que este foro nos puede brindar luces sobre la coyuntura actual, así como sobre el nuevo contexto que dificulta e imprime nuevas urgencias a los gobiernos. Pero, sobre todo, nos servirá para reflexionar y pensar juntos en el futuro de Europa, las perspectivas de América Latina y el Caribe y las posibilidades reales de abrir espacios nuevos de interacción.

Muchas gracias.